

## LOS EFECTOS SOCIALES DE LA POLITICA DEL F.M.I. EN LA REPUBLICA DOMINICANA

*José Serulle Ramia*

La política de ajuste del F.M.I. se viene aplicando en la República Dominicana desde agosto de 1982.

Las primeras medidas anunciadas por el Presidente de la República de turno, Dr. Salvador Jorge Blanco, en su discurso del 16 de agosto de 1982 inauguraron la puesta en práctica de la referida política. Esta fue reforzada en enero de 1983 a raíz de la firma del Acuerdo de Facilidad Ampliada entre el Gobierno Dominicano y el Fondo Monetario Internacional.

En el año 1984, habiéndose suspendido dicho acuerdo, y firmado el Acuerdo Puente o Sombra, la política de ajuste continuó siendo aplicada en lo fundamental.

La misma adquirió nuevos bríos bajo los auspicios del Acuerdo Stand By que duró desde abril de 1985 hasta abril de 1986.

Hoy en día, estando a la cabeza del gobierno el Dr. Joaquín Balaguer, aunque no existe acuerdo formal del gobierno con el F.M.I., las medidas de ajuste siguen llevándose a cabo e inclusive se han intensificado.

El F.M.I. mantiene una estricta vigilancia sobre la economía dominicana mediante el envío regular de misiones que "estudian la situación económica dominicana" y "hacen propuestas de política económica".

Después de más de cuatro años de aplicación, los resultados de la política de ajuste ya son claros.

El análisis de estos últimos en el orden social, que es el objeto específico de nuestro trabajo, requiere explicar los objetivos y el contenido de la política de ajuste. Además, la evaluación de sus efectos sociales nos obliga a dar a conocer aquellos de orden económico que inciden directamente en lo social.

# **I. LOS OBJETIVOS Y EL CONTENIDO DE LA POLITICA DE AJUSTE**

## *1) Los objetivos reales*

La aplicación de la política de ajuste en la República Dominicana responde obviamente a intereses tanto externos como internos.

Desde el exterior, el F.M.I. es el organismo que impulsa en el país la política de ajuste, respondiendo a las aspiraciones del capital financiero internacional de cobrar su deuda al Tercer Mundo y alimentar permanentemente la mecánica del endeudamiento externo.

El capital monopolista internacional promueve esa política con miras a reorientar el comercio mundial en una dirección favorable a sus intereses, que permita, a la vez, su continuo progreso.

Por su lado, el alto empresariado dominicano y los inversionistas extranjeros persiguen, a través de la política de ajuste, aplicar una política que le dé un nuevo impulso a su acumulación de capitales, promoviendo la reducción de los controles estatales sobre los mecanismos del mercado, la canalización cada vez mayor de los recursos monetarios de la economía hacia el sector privado y la desvalorización progresiva de la fuerza de trabajo.

La política de ajuste combina, pues, la satisfacción de intereses extranjeros, como el pago de la deuda, la reorientación de la economía en el sentido de crear una división internacional del trabajo favorable al gran capital intrnacional y la rentabilización de sus inversiones en nuestros países y de intereses ligados a grandes empresarios nativos deseosos de disfrutar, sin obstáculo alguno y de manera exclusiva, de los recursos humanos, monetarios y naturales del país.

Estos son los propósitos que generalmente han motivado al F.M.I. a diseñar los programas de ajuste y a los gobiernos a ponerlos en práctica en sus respectivos países.

Los programas señalados tienen una esencia y contenido comunes, aunque su aplicación adquiera formas adaptadas a la realidad económica, social y política de cada país.

## *2) El contenido de la política de ajuste*

Conforme a los objetivos que persiguen, las teorías que promueven las políticas de ajuste colocan los problemas vinculados al sector externo en el

centro de la crisis, considerando que estos últimos son los obstáculos principales al crecimiento interno.

De ahí el planteamiento de que debe resolverse primero el desequilibrio externo para que puedan ser echadas las bases del crecimiento interno, implícito en la política de ajuste.

Según el mismo razonamiento, el desequilibrio externo se debe a un desajuste entre el Gasto Nacional y el Ingreso Nacional, y de manera más precisa al hecho de que el nivel de gasto de la economía es superior al ingreso.

En tal virtud, la clave de la superación de la crisis consiste en llevar el país "a vivir de acuerdo a sus propias posibilidades".

Los responsables de la formulación de la política de ajuste en la República Dominicana han diseñado, pues, sus políticas con miras a ajustar el Gasto con el Ingreso, es decir, a disminuir el gasto hasta un punto tal que sea compatible con el nivel del Ingreso.

El Gasto Interno comprende el consumo privado o familiar, el consumo de la administración pública o gastos corrientes del Estado, la Inversión Privada y la Inversión Pública o gastos estatales.

$$\text{GASTO} = \text{consumo privado} + \text{gastos corrientes públicos} + \text{Inversión privada} + \text{Inversión pública}$$

Los componentes del gasto que más contribuyen a elevarlo y, a través del mismo, a incrementar el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos son, según los formuladores de la política de ajuste, los gastos públicos corrientes, la inversión pública y el consumo privado o familiar.

En efecto, los gastos corrientes del Estado son financiados, muchas veces, con emisiones de dinero sin respaldo en un aumento de la producción, debido a la insuficiencia de los ingresos del Estado, provocando una demanda de bienes que, al no ser satisfecha mediante la producción nacional, conduce a un aumento de las importaciones.

Asimismo, las políticas monetarias expansivas, de "crédito fácil", que han sido aplicadas durante las dos últimas décadas han ocasionado un aumento del medio circulante sin proporciones con el crecimiento de la producción social, lo que igualmente conduce a la población a satisfacer su demanda mediante la compra de bienes importados.



El gasto corriente estatal y el consumo de las familias son dos variables que presionan sobre la balanza comercial, ahondando su déficit y requiriendo de un endeudamiento externo creciente para financiarlo.

La inversión pública, por su lado, y debido a la inexistencia del ahorro público, se ha llevado a cabo en gran medida sobre la base del endeudamiento externo.

El déficit fiscal en general y el consumo popular son, pues, según esta concepción, los dos grandes responsables del déficit externo.

La inversión privada, por su parte, es acusada de gastar divisas para comprar materias primas y equipos importados, pero de no generar las divisas que puedan compensar las que absorbe el gasto estatal y el consumo privado.

Basándose en tales explicaciones, la política de ajuste es muy clara: restringir el gasto público y el consumo privado o familiar para ahorrar divisas y poner al sector privado en condiciones de generarlas.

Con estos objetivos es que se aplican la austeridad estatal, el aumento de los impuestos indirectos, la restricción del aumento salarial, una política crediticia restrictiva en términos generales, la eliminación del control de precios y la política de promoción de exportaciones y del turismo.

La política de ajuste, a la vez que pretende mejorar la situación del sector externo, "sanearla", según su expresión, y con ello favorecer los intereses del capital monopolista internacional, debe contar con una base de apoyo a nivel nacional.

El sector privado, el empresariado nacional, será estimulado a aplicar esa política mediante una serie de medidas que contribuirán a elevar sus ganancias y grado de acumulación de capital, al mismo tiempo que reorienta la producción en la dirección de producir divisas y de satisfacer los intereses de las potencias que controlan los mercados internacionales.

El crecimiento del sector privado nacional se incentiva a través del mantenimiento de salarios bajos, de la reorientación a su favor de los recursos monetarios antes absorbidos por el Estado y de la liberalización de precios y mercados. El sector privado es, a la vez, invitado a invertir en áreas productoras de divisas.

En suma, la política de ajuste está destinada en lo fundamental a reducir el gasto y sólo en una mínima parte, mediante el estímulo a la inversión privada en un número muy limitado de sectores, a elevar el nivel de ingreso.

Se sacrifican los ingresos, el consumo y los servicios públicos para la inmensa mayoría de la población y se sacrifica el conjunto de la economía productiva en aras de resolver los problemas externos y mantener una minoría de empresarios como beneficiarios y en favor ciego de esta política.

## II. LAS MEDIDAS TENDENTES A REDUCIR LA PRODUCCION Y EL CONSUMO

### 1) La reducción del déficit fiscal

El gasto público aunque aumentó en términos nominales, disminuyó en términos reales, es decir, aumentó en una proporción muy inferior al nivel de la inflación y de las necesidades.

En efecto, la tasa de crecimiento del gasto público fue de 57.98% entre 1983 y 1985, en términos corrientes, pasando de RD\$1,199.1 millones en 1983 a RD\$1,894.3 millones en 1985.

Sin embargo, en términos reales, es decir a precios constantes de 1970, el gasto público disminuyó a una tasa de 5.8%, durante el mismo período, pasando de RD\$709.73 millones en 1983 a RD\$668.57 millones en 1985.

Para aumentar los recursos ordinarios del Estado y disminuir el déficit fiscal, se estableció el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBI), impuesto indirecto que grava el valor agregado en las diferentes etapas de la producción y la comercialización, el cual repercute además directamente sobre el precio al consumidor, y se modificó el cálculo del Impuesto Ad-valorem sobre importaciones, tomando como base el precio del dólar en el mercado libre, en vez del peso a la par con el dólar como se hacía antes, ampliando de tal forma el valor a pagar.

Ambos gravámenes son inflacionarios y han contribuido de manera significativa al incremento de los precios de los bienes de consumo alimenticios y duraderos.

Esta política ha contribuido a reducir el déficit fiscal y sobre todo a eliminar su financiamiento mediante el crédito interno.

Ahora bien, más allá de una mejoría en el equilibrio contable del presupuesto, los efectos de esta política no fueron alentadores para la economía y los sectores mayoritarios de la población. La paralización de la inversión estatal ha surtido el efecto contrario al de multiplicar la actividad económica, contribuyendo al estancamiento de esta última. En igual sentido incidió el aumento de la tasa de cambio para fines de calcular el



impuesto Ad-valorem sobre las importaciones, ya que el mismo se ha hecho inaccesible para muchos pequeños y medianos empresarios, quienes han tenido que reducir su nivel de actividad productiva.

La política fiscal restrictiva aplicada provocó igualmente un deterioro en el nivel de ingreso real de los sectores sociales de escasos recursos, ya que la restricción de los gastos públicos no permitió mejorar los servicios públicos de salud, agua, educación, energía eléctrica, etc.

El Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y el aumento del Ad-valorem, que repercuten sobre los precios y gravan el consumo, contribuyeron igualmente a la disminución del ingreso real de amplios sectores de la población.

En cambio, se persiste en la política de exoneraciones a diversos sectores empresariales y, en la práctica, de no tocar las grandes propiedades o riquezas ni las ganancias extraordinarias, al tiempo que se permite continuar con la práctica de evasión fiscal.

## *2) La restricción del aumento salarial*

En la dirección de austerizar el consumo para llevarlo al nivel del ingreso, se inscribe el mantenimiento del ritmo de crecimiento de sueldos y salarios por debajo del ritmo de crecimiento del costo de la vida. El aumento salarial nominal mínimo de RD\$125.00 a RD\$175.00 en 1983 y luego a RD\$250.00 en 1985, mensual, fue prácticamente anulado por el acelerado proceso inflacionario, conociendo más bien los sectores trabajadores una disminución de su salario real.

El Estado tomó algunas medidas con el pretendido fin de contrarrestar el deterioro del ingreso real de la población de escasos recursos: establecimiento de ventas populares a precios reducidos por parte del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), Mercado de Productores, Programa de Medicamentos Genéricos (PROMESE), Boticas Populares, Vaso de Leche Escolar.

Dichas medidas beneficiaron, sin embargo, un número limitado de familias de escasos recursos y no permitieron contrarrestar el alza generalizada del costo de la vida.

Al mismo tiempo, el mantenimiento de bajos niveles de salarios está supuesto a favorecer la inversión en el sector privado a través de un aumento de las ganancias.

El bajo nivel de salarios, sin lugar a dudas, ha permitido a las empresas aumentar sus ganancias y compensar el aumento de los costos de producción que han ocasionado algunas de las disposiciones gubernamentales.

Sin embargo, esto por sí solo no ha incentivado, tal como lo veremos, la inversión en las áreas productivas de la economía.

### *3) La restricción monetaria*

También se enmarca en la política de disminución del consumo la política monetaria restrictiva aplicada por las autoridades monetarias y, en particular, el aumento de las tasas de interés a través de su llamada flexibilización.

La restricción del crédito, es decir, el mantenimiento en un nivel estable del medio circulante, castiga al Estado, conforme al criterio de restarle peso a la intervención estatal y dirige la mayor parte del mismo hacia el sector privado. Se trata, pues, de una reorientación del crédito del sector público al sector privado.

La política denominada de restricción del crédito reorienta igualmente el crédito en favor de la gran empresa y en detrimento de la pequeña y de la mediana.

Al producirse una elevación de la tasa de interés y al aumentar los costos financieros de las empresas, muchos empresarios que no disponen de suficiente capital para asumir estos costos experimentan una y mil dificultades para mantener sus niveles de actividad. La disminución de la misma ocasiona un incremento del desempleo.

Al hacer más difícil la actividad del pequeño y mediano empresario, y ser sólo accesible a los empresarios de alta capacidad financiera, la elevación de la tasa de interés agudiza en efecto la concentración del capital y del ingreso en el seno de los propietarios agrícolas e industriales.

En el sector bancario propiamente dicho, la elevación de la tasa de interés contribuye a elevar las tasas de ganancia de este sector y la centralización del capital en esa área de la economía, así como a la expansión del sector financiero y al debilitamiento de las ramas productivas y el consiguiente desabastecimiento del mercado interno en bienes de consumo personal y de consumo productivo.

#### *4) La política de devaluación y liberalización cambiaria*

En el plano cambiario, el gobierno ha estado aplicando una política de devaluación del peso dominicano, mediante la liberalización del mercado del dólar.

Esta devaluación ha tenido efectos recesivos sobre la economía y negativos sobre el poder adquisitivo de las mayorías populares.

El encarecimiento considerable de las importaciones, como consecuencia de la depreciación de la moneda nacional, dificulta en grado sumo el crecimiento de la actividad productiva, posibilitando que solamente las empresas de elevado grado de acumulación de capital participen rentablemente en el mercado, y constituye un factor más de dificultades y de ruina para la pequeña y mediana empresa. Mientras tanto, no se ha tomado ninguna medida en el sentido de crear las condiciones para que los insumos importados sean producidos en el país.

El elevado costo de las materias primas y equipos importados repercute sobre los precios a los consumidores, representando otro factor de inflación y de deterioro de los ingresos reales.

#### *5) La liberalización de los precios*

El aumento de los impuestos indirectos, el encarecimiento del crédito y el aumento del precio de los bienes de consumo y de producción importados, como consecuencia de la política de liberalización cambiaria, son medidas que repercuten sobre los precios.

Con el alegado objetivo de compensar el aumento de los costos de producción, pero con fines reales de reducir el nivel de consumo y aumentar el de ganancia, las autoridades gubernamentales han autorizado alzas sucesivas de precios de numerosos bienes, reduciendo enormemente el papel de la Dirección de Control de Precios, y han dispuesto la flotación de un gran número de bienes de consumo, incluyendo bienes de primera necesidad.

Al dejar libertad total a la aspiración de aumentar los márgenes de beneficios más allá de la simple compensación del aumento del costo de producción, a la creación de escasez artificial y a la especulación, la política de liberalización de los precios desencadenó una espiral inflacionaria, con niveles nunca registrados en el país, que asestaron golpes cada vez más rudos al nivel de la vida de los consumidores.



## 6) *La política de promoción de exportaciones*

La política de ajuste considera como área prioritaria de la economía aquella que genere divisas. De ahí la importancia que se le confiere a la política de promoción de exportaciones, es decir, impulsar las áreas de la economía productiva siempre y cuando sea para exportar.

Esta política implica el mantenimiento de salarios suficientemente bajos y un grado de sobre-explotación de la fuerza de trabajo considerablemente elevado para garantizar la competitividad de los productos de exportación. La misma política de devaluación de la moneda nacional que desvaloriza la fuerza de trabajo, sobre todo en las zonas francas, en los proyectos agroindustriales y turísticos forma parte de la política de promoción de exportaciones. Además, la política de incentivo a las exportaciones contribuye a desabastecer el mercado interno y a encarecer los productos tanto de primera necesidad como de consumo productivo.

## III. *LOS EFECTOS SOCIALES DE LA POLITICA DE AJUSTE*

Antes de entrar en los efectos propiamente sociales de la política de ajuste del FMI aplicada en la República Dominicana, debemos valorar cuáles son los efectos que dicha política ha tenido sobre las áreas productivas de la economía, ya que de éstas dependen en gran medida las condiciones en las cuales se desenvuelve la vida social del país.

### *1) El decrecimiento de la actividad económica*

La producción no solamente ha dejado de ser colocada en primer lugar en el orden de prioridades, sino que ha sido grandemente sacrificada. Su tendencia ha sido al decrecimiento desde 1983. Después de registrar una tasa de crecimiento de 3.9% en dicho año, el PBI apenas crece en 1.5% en 1984 y conoce una tasa de crecimiento negativa de 1.2% en 1985, tal como establecen los informes del propio Banco Central.

La tasa de crecimiento negativa afecta los sectores más importantes de la economía productiva, o sea el sector agropecuario (-2.3%), la industria manufacturera (-4.0%) y la rama de la construcción (-8.5%). También el área de la circulación de mercancías es sensiblemente afectada, nos referimos al comercio (-2.2%) y el transporte (-2.5%).

El gran auge conocido por el sector financiero de la economía (34.1% en 1986) no ha podido compensar el nivel de decrecimiento de los sectores mencionados, los cuales constituyen la base material fundamental de la economía dominicana y son la expresión concreta de hacia dónde conduce la aplicación de la política de ajuste.

Así, el conjunto de las medidas adoptadas en el marco de la política de ajuste ha tenido un efecto recesivo general sobre la economía dominicana.

Particularizando más el fenómeno, vemos como el subsector agrícola —siguiendo la terminología y datos oficiales— registró su menor tasa de crecimiento en 1986, calculándose la misma en -3.1%.

Este decrecimiento afecta en primer término las ramas agrícolas productoras de los principales bienes de la dieta diaria de los dominicanos y de los artículos tradicionales de exportación (tabaco, café, cacao).

De esta forma, en 1986 se produjeron grandes déficits en las ramas del arroz, de las habichuelas y de la leche. Esto ha provocado millonarias importaciones, las que a su vez se erigen en un obstáculo al desarrollo de la producción nacional de esos bienes fundamentales.

El sector manufacturero, aunque conoció en 1986 una ligera mejoría en relación al 1985, pasando de una tasa de -4.1% a una de 0.1%, manifiesta un real estancamiento.

La rama de la construcción ha recuperado un cierto ritmo de crecimiento en 1986, pero las condiciones para su real expansión siguen obstaculizadas por las dificultades que experimenta la producción de cemento y otros artículos fundamentales para la construcción.

La inflación por ejemplo luego de la aplicación del Acuerdo de Facilidad Ampliada, el 21 de enero de 1983, se elevó, según cifras oficiales, a un 19%, pasando la misma, en 1984, a un 45%. Con la unificación de la tasa cambiaria y la ampliación del Ad-valorem los precios de los bienes tan fundamentales en la construcción, como el cemento y las varillas, se incrementaron en un 60 y 40%, respectivamente.

Naturalmente, no todos los sectores y grupos económicos fueron y son afectados en igual magnitud por la recesión.

El encarecimiento del crédito y de las divisas han dificultado para las pequeñas y medianas empresas su mantenimiento en la competencia y les ha obligado en muchas ocasiones a reducir el volumen de su producción.



Las empresas con mayor capacidad financiera y técnica aprovechan la situación de crisis para desplazar a sus rivales más débiles, concentrando en sus manos una mayor proporción de la producción y del capital.

Los incentivos ofrecidos al sector privado no han motivado siempre a los propietarios de capital a invertir en los sectores productivos, sino a transferir sus capitales y reinvertir sus ganancias en sectores improductivos, como son por ejemplo el financiero, el turismo y el negocio de divisas.

El crecimiento de la actividad especulativa se hace a todas luces en detrimento de la producción de riquezas materiales, adquiriendo la economía dominicana un carácter cada vez más parasitario. Además, el proceso productivo nacional se orienta, principalmente, hacia los sectores de exportación, en detrimento de los que están consagrados al abastecimiento del mercado interno. Esto, aparte de que desabastece el mercado nacional, contribuyendo al aumento de los precios de los bienes de primera necesidad, subordina con mayor fuerza la economía dominicana a la división internacional del trabajo capitalista, a través del comercio exterior, y la hace más vulnerable a la coyuntura internacional.

## *2) La agudización de la crisis en el campo*

Uno de los sectores más golpeados por la política de ajuste es la agricultura, por lo que se ve afectada la mayoría de la población que vive de ese sector productivo y la economía nacional en su conjunto.

Las principales medidas que conforman esa política afectan negativamente el crecimiento del sector agropecuario y las condiciones de existencia de la inmensa mayoría de la población rural (ésta representa un 48% de la población total dominicana).

La política de disminución o de no aumento de los gastos estatales tiene una gran repercusión en el sector agrícola, ya que parte significativa de esta actividad nacional depende de una manera u otra de algunos "servicios" brindados por el Estado, como son el crédito, la asistencia técnica, la infraestructura para el transporte y la irrigación, la comercialización, etc.

Muchas instituciones públicas ligadas a la actividad agrícola han mermado sus actividades por falta de recursos.

La política de reducir los gastos públicos en la agricultura, conjuntamente con otras medidas de política económica, que elevan los costos de producción para el productor como el aumento de impuestos indirectos, la



restricción del crédito, la liberalización del mercado de divisas y la política de exportaciones, acelera el desarrollo del capitalismo en la agricultura sobre la base de la concentración del capital y de la producción en manos de los más competitivos capitalistas agrarios, lo que conduce de manera inevitable a una descomposición masiva y vertiginosa de la pequeña producción y, por ende, de la inmensa masa de productores campesinos.

De esta manera, la política económica neoliberal que se aplica acelera el proceso de descomposición del campesinado y, con el mismo, la expansión de la acumulación de capitales en el campo en favor de los grandes propietarios.

Los criterios de rentabilidad son los únicos que priman en la agricultura desde la aplicación de la política de ajuste, mientras que las labores de distribución de tierras, de subsidios y financiamiento a pequeños agricultores, y asistencia técnica o extensión agropecuaria son cada vez más reducidos.

Sin embargo, en medio de la más profunda calamidad y desesperación que se abate sobre más de 300,000 campesinos sin tierra, el Estado entrega tierras de su propiedad, mediante donaciones y arrendamientos a vil precio, a empresas extranjeras y a grandes capitalistas dominicanos. A estos empresarios se les brindan exoneraciones de impuestos y otros incentivos para favorecer la instalación de empresas agroindustriales, siendo destinado el resultado de la producción a la exportación.

### 3) *El incremento del desempleo*

Según cifras oficiales, el 28% de la población económicamente activa de la República Dominicana está desempleada. Esto no incluye el alto nivel de subempleo que conoce dicha población, llegando a más de un 40% en el campo dominicano. Diversas son las formas de ocupaciones a que recurren los pobladores urbanos y rurales para poder subsistir. De ahí, la existencia de miles y miles de chiriperos, buhoneros, trabajadores domésticos, etc.

El desarrollo de Zonas Francas Industriales, altamente promovido por las políticas de ajuste, las cuales vienen operando en el país desde 1968, sólo ha proporcionado empleos a unos 55,000 trabajadores dominicanos, siendo mayoritaria la participación del trabajo de la mujer en estos centros de producción, no llenando las expectativas creadas por sus promotores en lo que concierne al empleo.

El incremento de la competencia capitalista, acompañado esto del aumento en los costos de producción, ha hecho que las empresas industria-

les eleven su inversión en capital constante (maquinarias, equipos modernos, etc.). Este fenómeno ha provocado un empleo cada vez menor de fuerza de trabajo por unidad de capital invertido. De ahí que crear un empleo en la industria química, por ejemplo, tiene un costo actual de US\$24,000; en los materiales de construcción US\$18,500; en la agroindustria US\$10,800; en la industria de confecciones US\$2,000; y en el resto de la industria US\$15,000. Como se observa, la industria con un costo por empleo menor es la de confecciones. Muchas empresas locales favorecidas por la ley de incentivo a las exportaciones aumentan sus aspirales en la industria textil, así como las Zonas Francas Industriales, en las cuales las dos terceras partes de las empresas allí ubicadas se dedican a la fabricación de ropas.

Durante estos cinco años de aplicación de política de "ajuste", ante el auge de la competencia capitalista y de los privilegios otorgados a la producción para exportar, centenares de pequeñas y medianas empresas que producen para el mercado local han sido arruinadas, otras se han estancado en su desarrollo, teniendo esto consecuencias nefastas en el empleo, por cuanto son estas empresas las que emplean mayor fuerza de trabajo en términos absolutos.

La disminución de las actividades productivas ha traído, pues, como resultado un incremento sustancial del desempleo, pasando de un 27% de la población económicamente activa en 1985 a un 28.1% en 1986. Estas cifras oficiales están muy por debajo de la realidad, mas cuando observamos, que entre 1983 y 1984, al millón y medio de desempleados y subdesempleados, debemos de agregar los más 55,000 suspendidos y 70,000 mil cancelados.

Con la política restrictiva del F.M.I. y de expansión de Zonas Francas Industriales y de las otras empresas para la exportación, la República Dominicana no podrá dar respuesta de empleo a las más de 80,000 personas que entran al mercado laboral por año, y mucho menos establecer las condiciones materiales para suplir los 250 empleos que, como promedio diario, se necesitarían crear para que la tasa actual de desempleo no se incremente.

Vemos, así, como el problema del desempleo se amplía con la política del F.M.I., profundizándose el estado de angustia y de miseria de la población.

De seguir el ritmo actual de crecimiento del desempleo, la República Dominicana contará para 1990 con cerca de un millón de desempleados, es decir, más de un 30% de su población económicamente activa, y una población similar de subempleados augurándose condiciones de existencia infrahumanas y limitándose las perspectivas de un progreso económico para la nación, ya que la principal riqueza de la sociedad que es el ser



humano es reducido en su condición social a actuar como un simple miembro del ejército de desocupados, a fin de que presione siempre a la población a una miseria absoluta creciente y a vivir condiciones de trabajo de sobreexplotación.

#### 4) *El salario e ingresos reales*

Siguiendo los datos ofrecidos por el Banco Central de la República Dominicana observamos un aumento progresivo del costo de la vida durante los años 1978-1986, haciéndose sorprendente dicho aumento en el período de aplicación de la política de ajuste, es decir, desde 1983 en adelante. Así vemos como de 1978 a 1982, el nivel de los precios o "índice de precios al consumidor" se incrementó en 9.5% como promedio anual, y en 47.3% en forma acumulativa durante esos cuatro años. De 1982 a 1986, el incremento fue de 17.2% y de 85.4% respectivamente. Estas cifras oficiales demuestran por sí solas como el nivel de crecimiento de los precios se duplicó en términos de promedio.

Ahora bien, si se analiza la elevación del costo de la vida partiendo de los productos básicos que consume la población entonces se constata que estos porcentajes de incremento del costo de la vida son mucho mayores. Así, productos de la dieta nacional, como el arroz, las habichuelas, el plátano, la carne, la leche y los huevos aumentaron, de 1984 a 1986, en un 106%, 181%, 100%, 150%, 73% y 100% respectivamente.

En los años 1985 y 1986, los datos demuestran que para las personas que perciben ingresos entre 400 y 600 pesos dominicanos, el impacto acumulativo del aumento de los precios fue de 44.2%; en tanto que para las personas cuyos ingresos van de 50 a 100 pesos, el impacto fue de 50.3%.

Los artículos en sentido general más afectados por el aumento de los precios fueron, por ejemplo, en 1986, los de los grupos: alimentos, bebidas y tabaco (15.30%) y las prendas de vestir (15.27%). Esto, por supuesto, sin incluir las medicinas, las cuales conocieron incrementos superiores a los 500% desde que su importación pasó, en 1984, al "mercado paralelo" o libre de divisas.

A partir de agosto de 1986, al mantenerse y profundizarse la política de liberalización de los precios con la eliminación de controles y subsidios en varios productos de primera necesidad, el costo de la vida ha conocido aumentos similares y hasta mayores a las anteriores.

La unificación cambiaria o devaluación del peso dominicano que impuso el F.M.I. como condición previa a la firma de un acuerdo stand-by,



el 23 de enero de 1985, trajo como consecuencia un aceleramiento sin precedentes en el aumento de los precios, alcanzando en ese año una tasa de 37.5% en relación al año anterior que fue de 19.6%.

El aumento de los precios ha repercutido negativamente sobre los salarios y el ingreso real de la mayor parte de la población.

El salario mínimo real conoce una tendencia histórica a la disminución. De 1969 a 1979, el salario mínimo real, calculado en pesos de 1977, descendió de RD\$127.12 a RD\$106.93, es decir, de 15.8%. De 1979 a 1987, este descenso se aceleró, pasando el salario mínimo real de RD\$106.93 a RD\$59.22, lo que equivale a una disminución de 44.6%. El descenso más brusco se operó a raíz de la aplicación de medidas complementarias de ajuste, aún más recesivas, en enero de 1985, conociendo el salario mínimo real un decrecimiento, de 1985 a junio de 1987, de 27.23%.

El salario real promedio acusa la misma tendencia.

Los sueldos de los profesionales y categorías intermedias de empleados han experimentado aumentos igualmente inferiores a los aumentos de los precios.

Este es, sin lugar a dudas, el resultado más palpable de la política de restricción del consumo familiar y de austeridad salarial, uno de los aspectos centrales de la política de ajuste del F.M.I.

De 1975 a 1985, se han producido en la República Dominicana cuatro aumentos de sueldos y salarios, producto de las presiones constantes que ejercen las clases trabajadoras del país. Pero los RD\$60.00 de 1969 alcanzan en un 35% menos que los RD\$250.00 de 1986. Y los RD\$250.00 de 1986 son muy inferiores a los de este año de 1987, cuando en su primer trimestre el incremento del índice de precios fue de 14%.

Ahora bien, no sólo ese más de 70% de la población trabajadora que percibe ingresos por debajo de los RD\$250.00 ha sido fuertemente afectada. En sentido general, el salario real de los trabajadores dominicanos se ha reducido, de 1969 a junio de 1987, en cerca de un 38%.

Las quejas del pueblo, los lamentos, las angustias y el dolor y odio manifestado por las masas barriales, campesinas, obreras, crecen a diario ante la actitud indiferente de los sectores de altos ingresos y el desdén de los gobiernos de turno, los cuales en vez de controlar la situación haciendo valer la ley de protección al consumo popular y los mecanismos de control de precios, cumplen los dictados del F.M.I. y del Consejo Nacional de Hombres de Empresas liberalizando los precios, congelando los salarios y hasta disminuyéndolos en términos reales y permitiendo que la extorsión

sobre el pueblo sea mayor con la disminución progresiva de la calidad de los productos.

La disminución de los ingresos reales de las clases trabajadoras y de las categorías intermedias con ingresos fijos refleja y conduce permanentemente a un deterioro de sus condiciones de existencia y a una descomposición social de proporciones cada vez más alarmantes.

Esta disminución de los ingresos es, a su vez, la expresión concreta del aumento del grado de desvalorización y de sobreexplotación de la fuerza de trabajo.

Las devaluaciones sucesivas que ha experimentado la economía dominicana desde la instauración de la política de "ajuste", lo que ha traído como consecuencia durante los últimos cuatro años una depreciación del peso dominicano frente al dólar de cerca de 200%, se ha convertido en el fenómeno que más ha lacerado la existencia misma de los dominicanos, erosionando los ingresos de la población, arruinando a miles de pequeños productores y profundizando la miseria absoluta del pueblo.

Esta política de restricción del consumo o disminución del salario e ingreso reales de los trabajadores, política que está en el centro de los objetivos que persigue el F.M.I. con sus "ajustes", favorece la expansión y ganancias de los inversionistas extranjeros, particularmente norteamericanos, en la República Dominicana, a través de las Zonas Francas Industriales, de las empresas agro-industriales y proyectos turísticos.

### *5) Los servicios públicos*

Tal como vimos, el gasto público disminuyó en términos reales de 1980 a 1985. En la "clasificación funcional" del gasto público, los servicios sociales conocen una disminución en la misma proporción que el gasto público total, pasando, a precios constantes de 1970, de 263.03 millones de pesos, en 1980, a 225.99 millones de pesos en 1985, según la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES).

De todos los renglones de servicio social, el que más ha sido afectado de la reducción real del gasto público, en términos estadísticos, es el relacionado con la educación. En efecto, el presupuesto de educación disminuyó en un 16.5% de 1980 a 1985, a pesar de haberse incrementado el número de estudiantes y de ser mayores las exigencias materiales y científicas de los planteles educativos.



El sector salud, en un período en que por las condiciones de profunda crisis económica para la población aumentan las enfermedades de todo género, se ha mantenido en un constante deterioro en términos concretos, conociendo los hospitales, centros clínicos rurales y dispensarios médicos públicos un abandono casi total. Además, cerca de dos mil médicos están desempleados en un país en que encontramos regiones que apenas tienen un médico por ocho y diez mil habitantes. Se ha llegado a un extremo en que abundan más financieras y negocios ligados al sector financiero que médicos por habitantes.

A pesar del continuo crecimiento demográfico, a una tasa promedio de 3%, y del constante aumento de la demanda de servicios en salud por parte de la población, el presupuesto estatal consagrado a salud y asistencia social disminuye en un 10.5% en términos reales de 1980 a 1985. De esta manera, el gasto de salud por habitante se ve afectado en una proporción aún mayor.

En 1984, como resultado de la aplicación rigurosa de la política de ajuste, y producto del mantenimiento en el mismo nivel del presupuesto de las diferentes unidades de salud de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, afloraron las graves contradicciones del sistema de salud dominicano, lo que desembocó en una profunda crisis hospitalaria.

El proceso inflacionario conocido por el país desde la aplicación de la política de ajuste ha afectado significativamente la salud del pueblo.

Así, las clases trabajadoras y sus sectores hoy desempleados se ven en la obligación de reducir de manera general el consumo de alimentos de sus familias y de privarse de algunos bienes de consumo básicos para el equilibrio del organismo, disminuyendo aún más el nivel de consumo de calorías y aumentando las tasas de desnutrición (de la población infantil, de 0 a 15 años, un 65% conoce un cierto grado de desnutrición proteicocalórico) y de mortalidad infantil (menores de un año, 100 por mil en la región sur del país, según estudio realizado en 1983-1984).

Un informe del propio Banco Mundial demuestra cómo en el año 1986 se ha seguido deteriorando la salud de los niños dominicanos.

Esa institución establece, por otro lado, a raíz de un estudio realizado en marzo de 1985, con el patrocinio de la Organización Mundial de la Salud, que los servicios de apoyo de vital importancia estaban prácticamente paralizados. Así, la crisis hospitalaria de que hablamos más arriba, no sólo se caracterizaba por la inexistencia de jeringuillas, gaza, guantes, medicamentos de urgencia, etc., sino también por el hecho de que las tres cuartas partes de los equipos de rayos X y la mitad de los equipos de esterilización, así como la mayoría de las incubadoras, se encontraban descompuestas en 1985.



Además, los graves problemas económicos actuales han agudizado el estado de ansiedad e inseguridad de los individuos en la sociedad dominicana.

Estas manifestaciones psicológicas se expresan corporalmente en las llamadas enfermedades psico-somáticas: hipertensión arterial, úlcera péptica, colitis, cefalea, entre otras.

Otras revelaciones psicológicas son el insomnio, la irritabilidad, la agresividad, factores éstos que se expresan, por ejemplo, en la vida social, en los conflictos conyugales, familiares, imprudencias en el manejo de vehículos, escape a través de medios dañinos y artificiales, como el alcohol y las drogas.

Entre otros problemas sociales que genera y agrava la crisis impuesta por la política de ajuste, encontramos la delincuencia, la prostitución y los delitos de "cuello blanco".

Los otros servicios ofrecidos a la población, como, por ejemplo, transporte, vivienda, alcantarillado y agua potable, servicios a la comunidad y la energía eléctrica presentan un panorama de abandono por parte de las autoridades del Estado, y cuando no de encarecimiento tal que contribuyen enormemente a erosionar el ingreso real de la mayoría de la población dominicana.

## CONCLUSION

La política de ajuste, impulsada por el F.M.I., el Banco Mundial, la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y la Agencia Interamericana para el Desarrollo, es decir, por mecanismos altamente hegemonizados y dirigidos por los Estados Unidos de Norteamérica, persigue objetivos bien definidos, que tienen como norte garantizar el pago de la deuda externa, desvalorizar el precio de la fuerza de trabajo, expandir el comercio norteamericano y mantener a países como la República Dominicana bajo su dominio económico, político y militar.

Las consecuencias sociales de la aplicación de esa política neoliberal impulsada en el plano interno por los altos sectores de clase de la industria, de las finanzas y del comercio, en particular por el capital financiero, el cual viene arrojando la vida social en su conjunto, están ahí, avaladas con datos estadísticos formulados por las propias instituciones del Estado dominicano y de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien sabemos que esos datos son presentados de forma tal que la realidad no sea objetivizada en toda su crudeza.

En efecto, los sufrimientos que ha vivido el pueblo dominicano como consecuencia del régimen de producción e intercambio vigentes, acelerados a niveles inimaginables por la política de ajuste, tuvieron que expresarse de manera vivia, durante los días 23, 24 y 25 de abril de 1984, cuando el pueblo, desesperado y con valentía inaudita, salió a las calles de los barrios, a los caminos vecinales y a las carreteras para llevar con su justa rebeldía un rotundo NO a la política de hambre y de miseria impuesta por el F.M.I. y el gobierno de turno. Otra respuesta no podía esperarse de quienes impusieron ese estado de calamidad sobre el pueblo que no fuera el asesinato a mansalva, la arbitrariedad y el encarcelamiento de centenares y miles de dominicanos.

Los hechos, únicos indicadores exactos de la verdad, demuestran que la política llamada de ajuste afecta el ingreso real y el consumo de la población, y que, en cambio, favorece la inversión privada en varios sectores de la economía —en particular en los relacionados al sector especulativo, financiero, y a las ramas de producción y servicios para la exportación—, así como contribuye a incrementar sustancialmente las ganancias y acumulación de capitales de los grandes propietarios y empresarios, nativos y extranjeros.

Las exigencias de privatización acelerada de la economía dominicana que reclama e impulsa la política de ajuste, a la vez que persigue debilitar de manera general la intervención del Estado en la vida económica y social, tiene como objetivo fundamental poner en manos de sectores económicos privados, nativos y extranjeros, las principales riquezas del país.

De esta manera, los planes de desarrollo sobre la base de un adecuado uso de los recursos materiales y humanos del país, así como de una integración de los sectores de la circulación de mercancías y capitales y de la producción, lo que propiciaría un desarrollo real de la economía dominicana, se ven cada vez más alejados en el futuro que ofrece la política de ajustes a esta república del Caribe.

En síntesis, la política de ajuste a la vez que lesiona los intereses sociales de la inmensa mayoría del pueblo y cierra las posibilidades de un desarrollo integral de la economía en función de los mejores intereses nacionales, cercena, además, la soberanía del Estado y la independencia nacional. En ese contexto de opresión nacional, la política de ajuste conduce a debilitar o a obstaculizar todo intento de integración y cooperación reales entre los pueblos y Estados del Caribe, y con el resto del mundo.